



Alfonso Durazo Montaña, con Luis Rogelio Piñeda Taddei



Guadalupe Taddei Zavala

# Denuncian red de corrupción en INE, con **Taddei** e **hijo** como operadores

RAFAEL ORTIZ

## El INE, bajo sospecha

Un nuevo escándalo florece al interior del Instituto Nacional Electoral, al filtrarse denuncias sobre un presunto entramado de corrupción que rodea a su presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, en el que también aparece involucrado su hijo, Luis Rogelio Piñeda Taddei, actual secretario particular del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaña. Las voces internas consultadas sostienen que la cercanía política entre Durazo y el expresidente Andrés Manuel López Obrador permitió el ascenso de Taddei al organismo electoral, desde donde, aseguran, se consolidó una estructura de poder basada en favoritismos, contratos y control administrativo. “Guadalupe llegó imponiéndose, con soberbia e impunidad”, denuncian trabajadores inconformes, quienes afirman que la titular del INE utilizó el respaldo político de la llamada 4T para colocar perfiles afines en posiciones estratégicas, pasando por encima de la tradicional colegialidad del instituto.

## Finanzas, contratos y operadores

Los denunciantes aseguran que la Dirección Ejecutiva de Administración y el área de Adquisiciones concentran el control de más de 16 mil millones de pesos, cifra que podría duplicarse rumbo al proceso electoral de 2027. Según las acusaciones, Taddei habría entregado posiciones clave a proveedores y operadores cercanos, permitiendo el manejo discrecional de contratos relacionados con encuestas, préstamos de nómina, seguros médicos, seguros vehiculares, obras y servicios administrativos.

Las mismas fuentes afirman que el intercambio de favores entre grupos ligados a Sonora y al INE ha llegado “al descaro”, mediante nombramientos cruzados y negocios compartidos que tendrían como objetivo el enriquecimiento

personal a costa del erario. “Luis Rogelio Piñeda Taddei es preparado para afianzar posiciones de poder y negocios tanto en Sonora como dentro del INE”, acusa una de las voces consultadas.

## Auditorías y presuntas irregularidades

Las denuncias también alcanzan a Edgardo Amaya, exencargado de compras del instituto, y a Osvaldo Acuña, director de Finanzas, señalados por presuntos quebrantos patrimoniales e irregularidades administrativas detectadas, supuestamente, por auditorías de la Auditoría Superior de la Federación.

Pese a ello, los inconformes sostienen que ambos personajes habrían abandonado sus cargos sin consecuencias y beneficiados con contratos y liquidaciones millonarias. Otro nombre señalado es José Alberto Pérez de Acha, titular de la Unidad de Tecnología e Informática del INE, responsable de áreas sensibles relacionadas con la arquitectura tecnológica y la protección de los sistemas electorales federales. Las mismas voces vinculan a su hermano, Luis Pérez de Acha, con tareas de tesorería y fiscalización en campañas presidenciales de López Obrador, además de presuntos nexos de asesoría con actores cercanos al Cártel de Sinaloa y al gobernador sinaloense, Rubén Rocha Moya.

## Empresas “fantasma” y plazas “aviadoras”

Dentro del instituto también se denuncian presuntas alianzas con empresas fantasma, entre ellas Comercializadora JVLX-Flexométrica-Formas Finas, señalada por recibir contratos mediante los cuales, aseguran, se desviaron cerca de 65 millones de pesos en diciembre de 2024. Información difundida en redes sociales sostiene que en 2025 la ASF detectó irregularidades financieras y malos manejos, aunque presuntamente fueron

encubiertos por funcionarios cercanos a Taddei, entre ellos Jesús Octavio García González, Edgardo Amaya, Osvaldo Acuña y Olimpia Baños. Los denunciantes añaden que varios de estos operadores habrían perdido visas estadounidenses tras ser relacionados con negocios de huachicol y redes vinculadas a personajes cercanos a los hijos del expresidente López Obrador.

“Toda la porquería está interconectada y se protegen entre todos”, señalan las fuentes consultadas.

A ello se suma otra acusación delicada: la existencia de más de 500 plazas de “aviadores” dentro del INE, justificadas bajo esquemas de trabajo remoto heredados de la pandemia. Según los inconformes, estas posiciones representarían decenas de millones de pesos mensuales destinados a operadores políticos y familiares ligados a los Taddei, los Durazo, los Rocha Moya y otros grupos de poder.

## Desgaste institucional

Mientras las acusaciones crecen, el INE enfrenta uno de los momentos más delicados de su historia reciente. El organismo, creado como garante de la democracia mexicana, aparece ahora envuelto en señalamientos de nepotismo, corrupción y redes de intereses políticos.

Los denunciantes aseguran que la estructura construida alrededor de Guadalupe Taddei convirtió al instituto en un espacio dominado por complicidades internas, donde las decisiones administrativas y financieras responden más a intereses de grupo que al servicio público.

El juego de palabras que circula entre trabajadores resume el nivel de descomposición denunciado: empresas “INE-fables”, contratos “INE-ntendibles” y funcionarios “INE-ptos”.

Porque en México, incluso las tragedias administrativas terminan convertidas en chiste.

Una especie de mecanismo nacional de supervivencia.